



Asamblea General

Distr. general
23 de enero de 2014
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal
19º período de sesiones
28 de abril a 9 de mayo de 2014

Resumen preparado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con arreglo al párrafo 15 b) del anexo de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos y el párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo

República Popular Democrática de Corea*

El presente informe constituye un resumen de 12 comunicaciones de interlocutores¹ para el examen periódico universal. El informe sigue las directrices generales aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos en su decisión 17/119. No contiene opiniones, observaciones o sugerencias de parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ni juicio o pronunciamiento alguno sobre afirmaciones concretas. La información incluida se acompaña sistemáticamente de referencias en notas y, en la medida de lo posible, los textos originales no se han modificado. De conformidad con la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos, cuando procede se incluye una sección separada para las contribuciones de la institución nacional de derechos humanos del Estado examinado acreditada en plena conformidad con los Principios de París. Los textos completos de todas las comunicaciones recibidas pueden consultarse en el sitio web del ACNUDH. El informe se ha preparado teniendo en cuenta la periodicidad del examen y los acontecimientos ocurridos durante ese período.

* El presente documento no fue objeto de revisión editorial antes de ser enviado a los servicios de traducción de las Naciones Unidas.



Información proporcionada por otros interlocutores

A. Antecedentes y marco

1. Alcance de las obligaciones internacionales

1. No Fence Association for the Abolition of Concentration Camps in North Korea (NoFence) se hizo eco de la reciente firma de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad² y la comunicación conjunta 1 (JS1) recomendó su ratificación³. Citizens' Alliance for North Korean Human Rights (NKHR) dijo que el Gobierno debía firmar y ratificar la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada⁴. La JS1 recomendó la firma y ratificación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, para eliminar todas las formas de tortura perpetradas por el organismo de seguridad y el personal penitenciario⁵.

2. Christian Solidarity Worldwide (CSW) recomendó que se ratificara el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional⁶, y Human Rights Watch (HRW) recomendó además que se ajustara la legislación nacional para cooperar sin demora y plenamente con la Corte⁷.

3. HRW recomendó a la República Popular Democrática de Corea que se adhiriera a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a sus convenios fundamentales, y que hiciera participar a funcionarios de la OIT en la protección y la promoción de los derechos de los trabajadores, incluida la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso⁸.

2. Marco constitucional y legislativo

4. La JS1 dijo que se habían adoptado medidas para aplicar algunas normas de derechos humanos, como la Ley de protección laboral de 2010⁹. La NKHR se refirió también a la promulgación de la Ley de derechos de la mujer en diciembre de 2010, junto con la Ley de derechos del niño¹⁰.

5. Según Lawyers for Human Rights and Unification of Korea (LHUK), en el primer informe nacional para el Examen Periódico Universal (EPU), la República Popular Democrática de Corea declaró que la pena de muerte solo podía imponerse por cinco delitos extremadamente graves, tipificados en el Código Penal revisado en 2004, y no mencionó las disposiciones complementarias de 2007 y 2009, que habían ampliado los delitos sancionados con la pena capital¹¹. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) afirmó que, el 19 de diciembre de 2007, se había aprobado una "adición al Código Penal relativa a los delitos comunes", que ampliaba los "delitos" castigados con la pena de muerte. Esta constaba de 23 artículos, en 16 de los cuales se establecía la plena de muerte por una serie de delitos, entre ellos el contrabando y el comercio de estupefacientes, la apropiación de bienes del Estado, la falsificación de moneda y la venta ilícita de recursos del Estado. La adición permitía la aplicación de la pena capital siempre que las autoridades pudieran determinar que el delito en cuestión era "extremadamente grave"¹². Amnistía Internacional (AI) también informó que la República Popular Democrática de Corea había ampliado el número de delitos punibles con la pena capital mediante, entre otras cosas, enmiendas al Código Penal aprobadas en abril de 2009, que preveían la aplicación de esta pena al delito de sabotaje (desleal)¹³.

6. La FIDH observó que la lista de delitos por los que se podía imponer la pena de muerte había vuelto a alargarse tras el anuncio, en 2012, de dos decretos públicos denominados "circulación de divisas sancionable con la ejecución" (del Ministerio de Seguridad del Pueblo) y "ejecución por fusilamiento por divulgar información clasificada mediante un teléfono celular" (del Organismo de Seguridad del Estado)¹⁴. Por consiguiente,

había en total 24 delitos sancionados con la pena capital. En por lo menos 9 de estos —incluidos delitos como secuestro, robo, daño o destrucción de bienes estatales o militares, falsificación de moneda, contrabando de estupefacientes o joyas y metales de colores y su introducción en el mercado negro— la pena de muerte era obligatoria. Esa legislación infringía las normas de derechos humanos¹⁵.

7. People for Successful COrean REunification (PSCORE) recomendó a la República Popular Democrática de Corea que cumpliera plenamente las obligaciones dimanantes de los tratados internacionales de derechos humanos que había ratificado, revisando los estatutos y las leyes nacionales que regían la interpretación de los derechos humanos¹⁶.

3. Infraestructura institucional y de derechos humanos y medidas de política

8. AI informó que la República Popular Democrática de Corea no tenía una institución nacional de derechos humanos u otro mecanismo de denuncia independiente y eficaz competente en materia de derechos humanos¹⁷.

B. Cooperación con los mecanismos de derechos humanos

9. Si bien acogió con satisfacción la participación del Gobierno en el proceso del EPU, Life Funds for North Korean Refugees (LFNKR) lo instó a que tomara el examen con seriedad y respondiera a todas las recomendaciones, ya fuera aceptándolas o presentando razones para rechazarlas¹⁸.

10. HRW señaló que era posible que la República Popular Democrática de Corea tuviera uno de los peores historiales de cooperación con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. El país se negaba a reconocer las resoluciones aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea¹⁹. LFNKR instó encarecidamente al Gobierno a que cooperara con la comunidad internacional y procurara asumir su lugar como miembro plenamente productivo de esta comunidad²⁰.

11. AI informó además que el secretismo seguía rodeando a la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea. El Gobierno seguía denegando el acceso a observadores independientes de derechos humanos²¹. PSCORE observó que tener acceso al país era increíblemente difícil para los defensores de los derechos humanos, por lo que la principal fuente de información y datos que demostraban la existencia de conculcaciones de los derechos humanos procedían de personas que habían huido de este²².

12. AI señaló que, recientemente, el Gobierno había denegado el acceso al país de los miembros de la Comisión de Investigación establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2013 para estudiar las violaciones de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea, incluidos posibles crímenes de lesa humanidad²³. HRW recomendó a la República Popular Democrática de Corea que reconociera el mandato de la Comisión y le cursara una invitación a visitar el país²⁴.

1. Cooperación con los órganos de tratados

13. NoFence comunicó que el informe nacional para el EPU de la República Popular Democrática de Corea no indicaba que el país era parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos²⁵. CSW recomendó a la República Popular Democrática de Corea que procurara aplicar todas las recomendaciones que le habían formulado los diferentes órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos²⁶.

2. Cooperación con los procedimientos especiales

14. HRW manifestó que la República Popular Democrática de Corea había rechazado el nombramiento de un Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en el país. Desde el establecimiento del mandato, no se había permitido a ninguno de los dos relatores especiales visitar el país²⁷. AI recomendó que se otorgara acceso inmediato e irrestricto a la República Popular Democrática de Corea a todos los procedimientos especiales de las Naciones Unidas que solicitaran visitar el país²⁸.

C. Cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, teniendo en cuenta el derecho internacional humanitario aplicable

1. Igualdad y no discriminación

15. CSW dijo que un aspecto fundamental del control de la sociedad era el sistema de clasificación social *songbun*, que dividía a la población en 51 categorías de índole política, agrupadas en 3 grandes castas, a saber, las clases "leal", "vacilante" y "hostil". La clase de una persona se determinaba en virtud del nacimiento, teniendo en cuenta los antecedentes políticos y de otro tipo de la familia, y afectaba a todos los aspectos de la vida, como el acceso a la educación, la atención de la salud, las raciones de alimentos y las oportunidades de empleo²⁹.

16. En su análisis de la Ley de derechos de la mujer, la NKHR afirmaba que esa norma era tan vaga que era poco probable que pudiera aplicarse. Los artículos estaban formulados como principios generales; cuando se disponía la formulación de planes, no había orientación sobre cuál debía ser su contenido; no se preveían plazos de aplicación; y se prestaba escasa o ninguna atención a posibles sanciones u otras consecuencias en caso de incumplimiento. En segundo lugar, había algunas omisiones muy importantes. Las principales eran que se pasaban por alto los estereotipos de género en la sociedad o el acoso sexual, y faltaba una sección de definiciones. Tercero, en la mayoría de los aspectos, la Ley se centraba en asegurar más una igualdad formal que una sustantiva. En cuarto término, el mecanismo de seguimiento y aplicación era deficiente³⁰.

17. La NKHR comunicó además que muchas de las políticas del Estado eran contrarias al concepto de derechos y libertades expresado en la propia Ley. Por ejemplo, las mujeres informaban que, mediante la Liga de Mujeres, el Estado estaba reforzando la educación basada en la ideología del papel tradicional de las mujeres en una sociedad patriarcal, e impulsándolas a tener más hijos, aunque no proporcionaba servicios para el bienestar, la educación o la salud de la infancia y el sistema de servicios gratuitos se había desmoronado hacía tiempo³¹.

18. Según la NKHR, el hecho de que la Ley dispusiera la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso al trabajo, los salarios, la seguridad social, la atención médica o la educación carecía de sentido en la práctica. Más de la mitad de las mujeres debían renunciar a sus empleos oficiales para cuidar de su familia. Dado que se las consideraba oficialmente desempleadas, no podían utilizar los servicios de atención a la infancia de los lugares de trabajo o explotaciones agrícolas. Asimismo, solo podían acceder a la educación o los servicios de salud quienes pudieran pagar las sumas exigidas³².

19. HRW³³ y Jubilee Campaign (JC)³⁴ señalaron que los niños afrontaban discriminación e incluso castigos por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres u otros miembros de su familia. LFNKR exhortó al Gobierno a que aboliera inmediatamente el sistema de clases y el de "culpabilidad por asociación"³⁵.

2. Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona

20. CSW expresó su convencimiento de que había indicios racionales de crímenes de lesa humanidad cometidos por la República Popular Democrática de Corea. La naturaleza estrictamente jerárquica del régimen y la información disponible sobre la adopción de decisiones en el Gobierno indicaban que la cúpula política era responsable de la perpetración de esos delitos³⁶. La JS1 manifestó preocupaciones similares³⁷.

21. La FIDH³⁸ informó que, desde el primer EPU de la República Popular Democrática de Corea, se habían ejecutado docenas de personas. Con frecuencia, el poder judicial no participaba en el proceso y las ejecuciones se llevaban a cabo de forma arbitraria, por ejemplo, en el vasto sistema de campos de reclusión del país³⁹. Había ejecuciones públicas⁴⁰ y secretas⁴¹, y la pena de muerte se imponía por delitos menos graves y a grupos vulnerables. LHUK también puso de relieve la observación de la República Popular Democrática de Corea de que llevaba a cabo ejecuciones públicas cuando la persona en cuestión había cometido delitos brutales y la víctima o sus familiares pedían confirmar la ejecución⁴². AI se refirió al evidente aumento de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por guardias fronterizos para impedir a la gente abandonar la República Popular Democrática de Corea⁴³.

22. La FIDH concluyó que la República Popular Democrática de Corea debía: poner fin inmediatamente a todas las ejecuciones, dentro y fuera del sistema de campos de reclusión, incluidas las ejecuciones públicas y las secretas; establecer una moratoria inmediata de la pena de muerte como primer paso hacia su abolición y tomar medidas para que esta pena solo pudiera imponerse por los delitos más graves, como preveía el derecho internacional de los derechos humanos; suprimir su obligatoriedad; publicar estadísticas detalladas sobre las penas capitales y las ejecuciones, desglosadas por sexo y delito; y revisar la legislación para eliminar los delitos penales que eran esencialmente políticos o cuya definición era demasiado general según las normas internacionales de derechos humanos⁴⁴.

23. CSW señaló que las vulneraciones más atroces de los derechos humanos se cometían en los campos de reclusión (*kwan-li-so*) del país, en los que la tortura era extrema, generalizada y sistemática⁴⁵. AI destacó que, si bien las condiciones variaban según el lugar, todos los detenidos en *kwan-li-so* y otros centros de detención sufrían torturas y otras formas de malos tratos⁴⁶. PSCORE informó que, al parecer, el hambre se empleaba como método de tortura y control de los reclusos⁴⁷. CSW señaló que la tortura se usaba habitualmente en los interrogatorios, en algunos casos hasta causar discapacidad, parálisis o muerte. Al parecer, se había utilizado a reclusos en experimentos médicos, químicos y biológicos⁴⁸. LFNKR instó al Gobierno a que otorgara al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) un acceso inmediato, pleno y genuino a todos los centros de privación de libertad de la República Popular Democrática de Corea⁴⁹. La JS1 recomendó que se cumplieran las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos⁵⁰.

24. AI dijo que había hecho públicas imágenes satelitales de cuatro campos de reclusión de presos políticos *kwan-li-so*, que ocupaban enormes superficies en grandes zonas despobladas. Se calculaba que cientos de miles de personas estaban recluidas en *kwan-li-so* y otros centros de privación de libertad del país⁵¹. CSW informó que se forzaba a los reclusos en *kwan-li-so* a trabajar en la minería, en la industria maderera y en largos turnos en las fábricas con una ración mínima de comida, lo que los exponía al agotamiento, la enfermedad y, en muchos casos, la muerte⁵². La JS1 sostuvo que, entre esos presos, había personas acusadas de culpabilidad por asociación, a las que se había impuesto un castigo colectivo (*Yeon-jaw-je*) que abarcaba hasta tres generaciones, incluidos niños, mujeres y personas de edad⁵³. La JS1 recomendó que se abolieran los castigos colectivos, en particular para los familiares de las personas que habían huido del país⁵⁴.

25. NoFence facilitó detalles sobre la ubicación exacta de hasta seis presuntos campos de presos políticos⁵⁵. Asimismo⁵⁶, informó que, al parecer, se habían introducido

modificaciones en estos campos, y la JS1 afirmó que se habían producido unos pocos cambios en ellos debido a que la opinión internacional era consciente de su uso por el régimen norcoreano. Si bien se había desmantelado el campo 25, sus 30.000 a 50.000 presos habían sido distribuidos entre otros centros, como los campos 15, 16 y 14⁵⁷. AI también informó que las actividades que se observaban en las imágenes satelitales indicaban un reforzamiento del control de los movimientos de la población local cercana al *kwan-li-so* 14, lo que desdibujaba la distinción entre los reclusos en el campo y los habitantes del valle⁵⁸. La JS1 dijo que el Gobierno seguía negando la existencia de campos de presos políticos⁵⁹ y recomendó que se diera acceso a las instituciones internacionales, para garantizar la inexistencia o el cierre de estos campos⁶⁰.

26. La JS1 proporcionó detalles de otros tipos diferentes de centros de privación de libertad, incluidos algunos en los que se practicaba el trabajo forzado, como los *Gyo-yang-so* o "centros de reeducación por el trabajo" que, según los cálculos, superaban los 200, en los que todos los reclusos eran forzados a llevar a cabo trabajos pesados —entre otros sectores, en la agricultura y la construcción— y algunos de los cuales eran presuntamente gestionados de manera independiente, por entidades económicas de gran escala, y los "centros de capacitación laboral", en los que se intensificaban más las formas de trabajo⁶¹. HRW también informó de la red de *jip-kyul-so* (centros de reunión) y *ro-dong-dan-ryeon-dae* (centros de capacitación laboral), campos en los cuales se forzaba a trabajar a detenidos por gran variedad de supuestos delitos, como faltar al trabajo o la capacitación reglamentarios, viajar sin autorización o permanecer en el extranjero tras la expiración de la autorización, entre otros⁶². HRW recomendó el cierre inmediato de estos campos⁶³. La JS1 recomendó que se aboliera el sistema de reeducación por el trabajo y que se aplicaran en los centros de privación de libertad las normas laborales mínimas, la legislación nacional y las normas de protección en el trabajo⁶⁴.

27. PSCORE informó que los abusos sexuales contra las mujeres estaban generalizados y eran tolerados en los centros de privación de libertad⁶⁵, mientras que LFNKR también informó que las fuerzas de seguridad practicaban habitualmente la tortura y la violación⁶⁶. CSW dijo que, en general, en las cárceles no se permitían los embarazos y recomendó a la República Popular Democrática de Corea que desistiera inmediatamente de toda política que promoviera los abortos forzados o el asesinato de recién nacidos⁶⁷. La JS1 recomendó a la República Popular Democrática de Corea que aplicara en los centros de privación de libertad una norma de actuación que asegurara la aplicación de las leyes que protegían los derechos del niño y la mujer⁶⁸.

28. Según LFNKR, la resolución del problema del secuestro de extranjeros no había avanzado desde el último EPU⁶⁹. La NKHR citó estimaciones según las cuales, en 2011, seguían retenidos en la República Popular Democrática de Corea alrededor de 517 surcoreanos secuestrados; la organización formuló recomendaciones⁷⁰. LFNKR instó a la República Popular Democrática de Corea a que, con carácter prioritario, identificara y pusiera en libertad a todas las víctimas de secuestro, de todas las nacionalidades, que siguieran en el país⁷¹.

29. La NKHR informó que mujeres y hombres habían confirmado que golpear a las mujeres estaba tan integrado en la cultura que se consideraba normal. Las mujeres informaron que aún no había un lugar para pedir ayuda en caso de maltrato físico. La policía no intervenía en estos casos por considerarlos un problema doméstico⁷². La NKHR recomendó encarecidamente que se redactara una ley sobre la violencia contra la mujer⁷³.

30. La Iniciativa global para acabar con todo castigo corporal hacia niños y niñas dijo que los castigos corporales a los niños aún no habían sido prohibidos en todos los entornos y seguían siendo legales en el hogar, los entornos de cuidado alternativo y, posiblemente, en las escuelas⁷⁴. La organización recomendó que se aprobara legislación para prohibir expresamente los castigos corporales a los niños en todos los entornos, incluido el hogar⁷⁵.

31. Según HRW, persistía la trata de mujeres y niñas norcoreanas. Se persuadía a las víctimas de viajar a la frontera, ya fuera para huir del país o para buscar oportunidades económicas, y luego se las secuestraba o engañaba para que contrajeran matrimonio, o para someterlas a trabajos forzosos o a explotación sexual⁷⁶. JC recomendó que todos los migrantes y las víctimas de la trata que regresaran a la República Popular Democrática de Corea, en especial los niños, fueran tratados como víctimas y no como delincuentes⁷⁷.

3. Administración de justicia, incluida la lucha contra la impunidad, y estado de derecho

32. La JSI informó que no había un estado de derecho ni un sistema judicial que garantizaran un juicio imparcial a los sospechosos⁷⁸. La FIDH señaló que, además de la opacidad de los tribunales ordinarios, existía un régimen cuasipenal paralelo que no respetaba el imperio de la ley. Los "Diez principios" por los que se regía el Partido de los Trabajadores de Corea con frecuencia estaban por encima del sistema judicial. Al parecer, el partido tomaba conocimiento de las causas antes de su sustanciación, y podía pronunciar condenas alternativas antes de que tuviera lugar un verdadero juicio. El partido no solo determinaba la detención o no de un sospechoso sino que se injería sistemáticamente en el proceso judicial⁷⁹.

33. La FIDH informó que, en el caso de delitos ordinarios, la investigación y la vista preliminar eran de la competencia del Ministerio de Seguridad del Pueblo. No obstante, la traición, los delitos contra el Estado y los presos políticos competían al Organismo de Seguridad del Estado. Las personas repatriadas a la fuerza desde un país vecino eran presuntamente tratadas como presos políticos e interrogadas por dicho Organismo por "traición a la patria". Al parecer, en esos casos no había un juicio oficial⁸⁰.

34. LFNKR pidió al Gobierno que reformara inmediatamente su sistema jurídico para separar los poderes legislativo y ejecutivo⁸¹. La FIDH recomendó a la República Popular Democrática de Corea que garantizara la independencia del poder judicial y el derecho a un juicio imparcial, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos⁸². PSCORE recomendó que se mejoraran las garantías procesales en el procedimiento penal y que se disuadiera a los tribunales de aceptar como pruebas confesiones forzadas, obtenidas mediante tortura y coerción⁸³.

35. Si bien, como observó JC, de conformidad con el artículo 69 de la Constitución "Los ciudadanos tienen derecho a presentar quejas y peticiones. El Estado deberá investigar y tramitar de manera imparcial estas quejas y peticiones, con arreglo a la legislación"⁸⁴; LFNKR señaló que criticar a las autoridades, abiertamente o no, era severamente castigado; los familiares de los acusados de criticar al Gobierno también eran objeto de un mayor control y duros castigos⁸⁵.

4. Derecho a la intimidad, al matrimonio y a la vida familiar

36. Según la FIDH, aunque los investigadores y la policía seguían siendo los principales agentes encargados de detectar a los infractores de las leyes, también había una importante cultura de delación ciudadana, según la cual cada ciudadano tenía el deber de denunciar los delitos ante las autoridades políticas, en especial si le cabían responsabilidades en el *ban*. Cualquier sospecha de mala conducta debía ser inmediatamente denunciada, incluso por familiares, que de no hacerlo sufrirían el mismo castigo⁸⁶.

5. Libertad de circulación

37. HRW informó que trasladarse dentro del país sin la debida autorización expedida por el Gobierno constituía delito penal. Se requería una autorización para salir de la zona de residencia y circular dentro del país o para salir de este⁸⁷. LFNKR señaló que la

autorización para vivir en la comparativamente próspera capital, Pyongyang, estaba restringida a ciertos miembros de la clase más favorecida⁸⁸.

38. HRW enumeró los motivos por los que las personas huían del país, a saber, escapar de la persecución, temer el control o una nueva detención después de haber sido liberado de un campo de trabajos forzados, evitar la privación económica y la escasez de alimentos, o intentar reunirse con familiares que ya habían huido del país. Otros norcoreanos, que iban y venían entre la República Popular Democrática de Corea y un país vecino para llevar a cabo un comercio transfronterizo lícito e ilícito, con la connivencia de funcionarios corruptos, también entraban en conflicto con las autoridades⁸⁹.

39. HRW recomendó que se permitiera a todos los ciudadanos norcoreanos trasladarse libremente dentro del país y pidió que se pusiera en libertad a todas las personas detenidas por ejercer su derecho a la libertad de circulación⁹⁰. LFNKR exhortó al Gobierno a que permitiera a sus ciudadanos desplazarse libremente tanto dentro del país como fuera de sus fronteras, entre otros medios proporcionándoles pasaportes, y que pusiera fin inmediatamente al empleo de la tortura y la violación por sus funcionarios⁹¹.

40. AI dijo que, desde su llegada al poder a finales de 2011, el Gobierno de Kim Jong-Un' había anunciado una campaña de represión contra las personas que fueran sorprendidas intentando cruzar la frontera sin autorización⁹². JC, HRW y LHUK también informaron que la patrulla fronteriza de la República Popular Democrática de Corea tenía orden de "disparar sin previo aviso" a los refugiados que intentaran cruzar la frontera de manera ilegal⁹³. Además, AI informó que personas que habían regresado a la República Popular Democrática de Corea habían aparecido en mensajes de propaganda, como entrevistas emitidas por la televisión norcoreana, para disuadir a otros de intentar abandonar el país⁹⁴. La JSI indicó que el número de personas que huían hacia la República de Corea se había reducido en más de un 50%, lo que reflejaba la intensificación de las medidas de seguridad y la violencia utilizadas para disuadir a los norcoreanos de dejar el país⁹⁵.

41. AI recomendó a la República Popular Democrática de Corea que garantizara que nadie fuera detenido o procesado por salir del país sin autorización, ni sometido a tortura y otros malos tratos, trabajos forzados, desaparición forzada o pena de muerte al regresar al país⁹⁶.

6. Libertad de religión o de creencias, de expresión, de asociación y de reunión pacífica, y derecho a participar en la vida pública y política

42. CSW afirmó que en la República Popular Democrática de Corea no había libertad de pensamiento, de conciencia, de religión o de creencias, y que los creyentes afrontaban duras persecuciones. Al parecer, la veneración de la dinastía Kim y el carácter religioso del culto a su personalidad habían dado lugar a la intolerancia hacia las creencias religiosas. En Pyongyang había por lo menos cuatro iglesias autorizadas por el Estado y un nuevo seminario protestante, pero la opinión generalizada era que estaban destinados sobre todo a los extranjeros y a presentar una imagen falsa de la situación⁹⁷. JC señaló que la posesión de biblias u otros objetos religiosos era al parecer ilegal y podía castigarse con la privación de libertad y la ejecución⁹⁸.

43. LFNKR informó que el Gobierno imponía estrictas restricciones a los medios de comunicación y otras posibles fuentes de información que llegaban al país⁹⁹. PSCORE destacó que poseer CD o DVD extranjeros era un delito por el que podía imponerse la pena de muerte¹⁰⁰. La JSI dijo que había casos en los que se había recluido en campos de presos políticos a trabajadores enviados al extranjero por el Gobierno que habían tenido acceso a medios de comunicación del país de destino¹⁰¹. HRW informó que ser visto utilizando un teléfono móvil podía ser suficiente para motivar una investigación, detención y malos tratos durante la privación de libertad¹⁰².

44. LFNKR señaló que las autoridades eran confirmadas por un Parlamento, cuyos miembros eran elegidos por el Partido de los Trabajadores. Debido a falta de libertad para reunirse en público y de medios de comunicación no controlados por el partido, era imposible para los ciudadanos expresar opiniones disidentes. Por lo tanto, no había una "vida pública" o "vida política" significativas. LFNKR exhortó al Gobierno a que otorgara a sus ciudadanos las libertades de religión y de reunión, pusiera fin a la práctica de castigar a los ciudadanos que criticaran al Gobierno, protegiera la libertad de expresión e instaurara elecciones libres, limpias y multipartidistas¹⁰³.

7. Derecho a trabajar y a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias

45. HRW informó que, como parte de su economía, el Gobierno exigía a la población, incluso a escolares y estudiantes universitarios, que desempeñaran trabajos forzosos y no remunerados. Personas que han huido del país han señalado que, tras la conclusión de la enseñanza, debían trabajar en el lugar que se les asignaba, y que muchos de estos puestos no eran remunerados o proporcionaban una compensación sustitutiva mínima en forma de alimentos u otras raciones. Para quienes intentaban ganar dinero por otros medios, no presentarse al trabajo asignado podía dar lugar al envío a un campo de trabajos forzados por un plazo de hasta dos años¹⁰⁴. LFNKR expresó inquietudes similares¹⁰⁵. HRW recomendó que se permitiera a los trabajadores elegir dónde trabajar y cambiar de empleo sin sufrir penas o castigos¹⁰⁶.

46. HRW sostuvo que la falta de remuneración por el trabajo hacía que la supervivencia económica de los trabajadores y sus familias dependiera de su capacidad para llevar a cabo sus propias actividades informales. Con tal fin, debían pagar sobornos a los funcionarios locales y al gerente de la empresa, para que los liberara de su obligación de trabajo diario y pudieran disponer de tiempo para iniciar su propio negocio, como producción doméstica, venta informal de bienes en los mercados locales, o comercio itinerante entre provincias, o incluso transfronterizo¹⁰⁷.

8. Derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado

47. CSW afirmó que la pobreza extrema y la escasez de alimentos eran la causa de gran parte del sufrimiento de la población y de muchos abusos perpetrados en su contra¹⁰⁸, mientras que LFNKR informó que la falta de libertad de circulación exponía a los norcoreanos a castigos por desplazarse sin autorización en búsqueda de alimentos¹⁰⁹.

48. HRW señaló que el Código Penal de 2004 contenía un capítulo dedicado a los "delitos contra la gestión de la economía", que tipificaba como delito una serie de actividades económicas como "proporcionar ilegalmente dinero o bienes a cambio de trabajo" (art. 119). Estas restricciones, combinadas con otras leyes que tipificaban como delito las infracciones al comercio e imponían controles al cambio de divisas, permitían al Gobierno procesar a una persona por llevar a cabo casi cualquier actividad económica privada¹¹⁰.

49. HRW afirmó que, si bien en muchas partes del país se llevaban a cabo abiertamente actividades económicas privadas, los agricultores y comerciantes se arriesgaban a sufrir detenciones arbitrarias y represión, lo que los exponía a abusos, exacciones y la privación de libertad¹¹¹. HRW recomendó a la República Popular Democrática de Corea que revocara la legislación que tipifica como delito los intercambios comerciales, la intermediación comercial y las actividades de mercado, y que liberara a los detenidos por estos delitos¹¹². LFNKR instó al Gobierno a que alentara el desarrollo de la empresa privada¹¹³.

50. AI informó que la producción de granos de la República Popular Democrática de Corea había aumentado, y que se calculaba que el déficit de cereales en 2012/13 era de 507.000 toneladas métricas, esto es, el menor en muchos años. No obstante,

aproximadamente 16 millones de norcoreanos (66% de la población) dependían del sistema público de distribución, insuficientemente abastecido, y seguían sufriendo una inseguridad alimentaria crónica y una alta vulnerabilidad a los déficit de producción. Alrededor de 2,4 millones de personas necesitaban asistencia alimentaria periódica, entre ellos grupos vulnerables como niños, mujeres embarazadas y personas de edad de las provincias que registraban mayor inseguridad alimentaria. La persistente escasez de alimentos había agravado la desigualdad en el acceso a estos entre los norcoreanos. Al parecer, la distribución de granos por el sistema público favorecía a grupos específicos, como los funcionarios del Partido de los Trabajadores, el Organismo de Seguridad del Estado, las fuerzas armadas y la industria militar, y los mineros¹¹⁴.

51. AI dijo que la escasez de alimentos persistía en parte debido a las fallidas políticas gubernamentales, y citó información según la cual, tras la reforma monetaria de 2009, se habían producido muertes por inanición en el país y, más recientemente, se había informado de muertes por inanición en la provincia de Hwanghae¹¹⁵. JC formuló recomendaciones, entre ellas que la República Popular Democrática de Corea prestara asistencia a los más vulnerables, otorgándoles ayuda alimentaria prioritaria¹¹⁶.

52. AI informó que el acceso de la ayuda alimentaria internacional a la República Popular Democrática de Corea había mejorado tras la firma, en abril de 2011, de una carta de entendimiento entre el Gobierno y el Programa Mundial de Alimentos, si bien, hasta agosto de 2013, los organismos de las Naciones Unidas solo habían recibido fondos equivalentes a la tercera parte de las cifras previstas¹¹⁷. LFNKR instó al Gobierno a que se comprometiera a colaborar con la comunidad internacional para reformar sus sistemas agrícola y de distribución de alimentos, solicitando el asesoramiento de expertos externos cuando fuera necesario¹¹⁸.

9. Derecho a la salud

53. Según AI, la respuesta tardía e inadecuada del Gobierno a años de escasez alimentaria crónica, incluida su renuencia a solicitar la cooperación y asistencia internacionales, habían dado lugar a una malnutrición generalizada y crónica por la cual, a su vez, muchas personas padecían inmunosupresión. En combinación con políticas gubernamentales fallidas y contraproducentes, como la falta sistemática de recursos para la atención básica de la salud, lo anterior había provocado el estallido de epidemias y brotes masivos de enfermedades relacionadas con la mala alimentación¹¹⁹.

54. AI dijo que, aunque la República Popular Democrática de Corea afirmaba contar con atención de la salud universal y gratuita, las instalaciones sanitarias estaban en realidad muy deterioradas, sufrían frecuentes apagones y carecían de calefacción. Con frecuencia, el personal médico no percibía salarios y muchos hospitales no tenían medicamentos ni otros suministros esenciales. Aunque fuera ilegal, los médicos habían empezado a cobrar por sus servicios y, cada vez más, los pobres carecían de acceso a una atención médica completa, en especial a los medicamentos y la cirugía. Debido a la falta de recursos, el personal médico tenía escaso contacto con los nuevos adelantos o las mejores prácticas internacionales y poco acceso a capacitación al respecto¹²⁰. La NKHR dijo que los pacientes internados debían procurarse comida para ellos y los médicos a cargo, o depender de alimentos suministrados por sus familiares¹²¹. AI y LFNKR formularon recomendaciones¹²².

55. Según la NKHR, el aborto era presuntamente ilegal en la República Popular Democrática de Corea. Los abortos se practicaban en el hogar, sin anestesia ni condiciones sanitarias adecuadas. De conformidad con testimonios de mujeres, no se impartía educación sobre las enfermedades de transmisión sexual, como el VIH/SIDA¹²³.

56. Otro problema, señalado por la NKHR, era el uso cada vez más generalizado de estupefacientes, intensificado por la falta de acceso a servicios médicos. El opio seguía

estando ampliamente disponible y las personas tendían a cultivarlo cerca de sus hogares, porque lo consideraban una hierba medicinal. Al parecer, el uso de metanfetamina iba en rápido aumento¹²⁴.

10. Derecho a la educación

57. LFNKR informó que, en la práctica, los niños con frecuencia no podían asistir a la escuela debido a la gravísima escasez de alimentos, además de la falta de ropa adecuada y material escolar¹²⁵. LFNKR instó al Gobierno a que se comprometiera a colaborar con la comunidad internacional para reconstruir su sistema educativo y velar por que todos los niños recibieran, como mínimo, enseñanza primaria gratuita y obligatoria adecuada, comparable a la de otros países¹²⁶.

58. JC dijo que se exigía a los escolares que llevaran a cabo varias horas de entrenamiento militar y adoctrinamiento político, y recomendó a la República Popular Democrática de Corea que detuviera el proceso de militarización temprana de los niños en el sistema de enseñanza¹²⁷.

59. HRW sostuvo que los docentes y los administradores de las escuelas forzaban a los estudiantes a trabajar, entre otras cosas recolectando alimentos en las zonas montañosas para su reventa, talando árboles para su uso por las escuelas y reuniendo una cuota determinada de materias primas valiosas para su reciclaje, supuestamente en el marco de una campaña gubernamental, y a desempeñar labores agrícolas en explotaciones estatales. A partir de la enseñanza secundaria, cuando tenían aproximadamente 11 años de edad, los alumnos estudiaban en la mañana pero en la tarde eran enviados a realizar un trabajo no remunerado organizado por la escuela. En las provincias más pobres del norte del país, a veces se pretendía que los alumnos comenzaran a trabajar con apenas 8 o 9 años de edad. HRW recomendó a la República Popular Democrática de Corea que pusiera fin inmediatamente al empleo de alumnos de cualquier edad en actividades laborales forzosas, inseguras o no relacionadas con sus estudios¹²⁸.

11. Personas con discapacidad

60. La NKHR informó que había normas sociales tradicionales que permitían la discriminación de las personas con discapacidad. Asimismo, un ex funcionario del Ministerio de Seguridad Pública (la policía) ha sostenido que en una isla funcionaba el "Hospital 83", al que eran enviados los discapacitados para ser sometidos a exámenes médicos, así como a ensayos de armas biológicas y químicas. El entrevistado informó que, con frecuencia, se enviaba a personas con discapacidad al campo de reeducación por el trabajo de larga estancia *Kyo-hwa-so* N° 1 de Kaechon¹²⁹. La NKHR recomendó a las autoridades que atendieran a las denuncias relativas al trato de las personas con discapacidad y que hicieran frente a la discriminación cultural negativa hacia estas personas mediante programas educativos¹³⁰.

12. Minorías

61. LFNKR dijo que la sociedad norcoreana era mayormente homogénea. No obstante, las mujeres que cruzaban la frontera y regresaban embarazadas a su regreso eran habitualmente forzadas a abortar para evitar el nacimiento de niños de padre chino¹³¹. PSCORE¹³² y la JSI¹³³ expresaron preocupaciones conexas.

13. Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo

62. HRW señaló que salir del país sin autorización estatal se consideraba un acto de traición, punible con largas penas de prisión. Las personas capturadas al intentar cruzar la frontera o que se forzaba a retornar a la República Popular Democrática de Corea eran

interrogadas bajo tortura y recluidas en campos de trabajos forzados. Cualquier indicio de que un ciudadano norcoreano tenía contacto con ciudadanos u organizaciones surcoreanas daba lugar a severos castigos, como el internamiento en campos *kwan-li-so* y *kyo-hwa-so*, o hasta la pena de muerte. Incluso algunos niños que habían cruzado la frontera sin autorización habían sido detenidos y sometidos a graves maltratos a su regreso. El temor fundado a ser perseguidos a su regreso convertía a muchos norcoreanos en el extranjero, en un país vecino o no, en refugiados *in situ*¹³⁴.

14. Derecho al desarrollo

63. LFNKR cuestionó la aparente prioridad que otorgaba la República Popular Democrática de Corea a costosas ambiciones nucleares en desmedro de las necesidades básicas de supervivencia de su población¹³⁵. LFNKR instó al Gobierno a que se comprometiera a asumir un papel cooperativo y productivo en la sociedad internacional, que hiciera innecesario sacrificar valiosísimos recursos en aras de un desarrollo militar excesivo¹³⁶.

Notas

¹ The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all original submissions are available at: www.ohchr.org.

Civil society

Individual submissions:

AI	Amnesty International, London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (UK);
CSW	Christian Solidarity Worldwide, New Malden, UK;
FIDH	International Federation for Human Rights, Paris, France;
GIEACPC	Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, London, UK;
HRW	Human Rights Watch, Geneva Switzerland;
JC	Jubilee Campaign, Fairfax, VA, United States of America;
LFNKR	Life Funds for North Korean Refugees, Tokyo, Japan;
LHUK	Lawyers for Human Rights and Unification of Korea, Seoul, Republic of Korea;
NKHR	Citizens' Alliance for North Korean Human Rights, Seoul, Republic of Korea;
NoFence	No Fence in North Korea, Association for the Abolition of Concentration Camps in North Korea, Tokyo, Japan;
PSCORE	People for Successful COrean REunification, Seoul, Republic of Korea.

Joint submissions:

JS1	Joint Submission 1: Coalition for Human Rights in North Korean Detention Facilities submitted by: Free the North Korean Gulag (FNKG) and, North Korea Strategy Center (NKSC), Seoul, Republic of Korea.
-----	---

² NoFence, para.4.

³ JS1, para 24 recommendation, b.

⁴ NKHR, p.6. See also, HRW, p.5.

⁵ JS1, para. 43 a. See also, PSCORE, recommendations, p.5.

⁶ CSW, para. 8.

⁷ HRW, p. 5, recommendations.

⁸ HRW, p.6, recommendations.

⁹ JS1, para. 5.

¹⁰ NKHR, p.1.

¹¹ LHUK, para. 2, part D.

¹² FIDH, para. 10.

¹³ AI, p.2.

¹⁴ FIDH, para. 11.

¹⁵ FIDH, para. 12.

¹⁶ PSCORE, recommendation, p.5.

- 17 AI, p.1.
18 LFNKR, p.6.
19 HRW, p.1, summary.
20 LFNKR, p. 7, introductory paragraph.
21 AI, p.1.
22 PSCORE, executive summary.
23 AI, p.1.
24 HRW, p.5. See also, CSW, recommendations, paras. 12 and 13.
25 NoFence, para. 8.
26 CSW, recommendation, para. 7.
27 HRW, p.1, summary.
28 AI, recommendation, p.5. See also, CSW, recommendations, paras. 11, 12 and 13 and HRW, p.5.
29 CSW, para. 15. See also, CSW, para.23.
30 NKHR, part A.
31 NKHR, part A.
32 NKHR, part A.
33 HRW, p.5.
34 JC, para. 21.
35 LFNKR, p. 2.
36 CSW, para. 5.
37 JS1, para. 17.
38 FIDH, Summary.
39 See also, PSCORE, para. 6.
40 See also AI, p.2, JS1, paras.36-37, PSCORE, para. 3 and LHUK, para. 3, part C, p.5.
41 See also, FIDH, para. 14.
42 LHUK, point 3, part C, p.5.
43 AI, p.2.
44 FIDH, recommendations, p. 7.
45 CSW, para. 16. See also, PSCORE, paras. 5 and 6.
46 AI, p.2. See also PSCORE, para.10.
47 PSCORE, para. 5. See also, JS1, para. 32.
48 CSW, para. 32.
49 LFNKR, p.7.
50 JS1, para. 35.
51 AI, p.1.
52 CSW, para. 25. See also, CSW, para 17 and JS1, paras. 30-34.
53 JS1, paras. 13-14. See also, AI, p.2.
54 JS1, para. 18 a.
55 NoFence, para. 11.
56 NoFence, paras. 11 and 17.
57 JS1, para. 16.
58 AI, p.3.
59 JS1, para. 46.
60 JS1, para. 18 c. See also, NoFence, recommendations, p.5 and AI recommendations p.4.
61 JS1, para. 7, parts b and d. See also, PSCORE, para. 9.
62 HRW, p.4.
63 HRW, p.6.
64 JS1, para. 24.
65 PSCORE, para. 11. See also, recommendation, p.5.
66 LFNKR, point 3, p. 3.
67 CSW, paras. 26 and 29.
68 JS1, recommendation, para. 29 a. See also, JS1, paras. 25-27.
69 LFNKR, p.3.
70 NKHR, pp. 4-6.
71 LFNKR, p.3.
72 NKHR, p.3.
73 NKHR, p. 5.

- ⁷⁴ GIEACPC, para. 1.2.
⁷⁵ GIEACPC, p.1 and para 1.3.
⁷⁶ HRW, p.2.
⁷⁷ JC, para. 27. See also, JC, paras. 25, 9, 13-14.
⁷⁸ JS1, para. 8.
⁷⁹ FIDH, para. 18.
⁸⁰ FIDH, para. 20.
⁸¹ LFNKR, p.3.
⁸² FIDH, part III, p.7
⁸³ PSCORE, p.5. See also, JS1, para. 12, and AI, p.4.
⁸⁴ JC, para. 2.
⁸⁵ LFNKR, pp.3-4.
⁸⁶ FIDH, para. 21.
⁸⁷ HRW, p.3.
⁸⁸ LFNKR, point 1, p. 2. See also, LFNKR, point 2, p.3.
⁸⁹ HRW, p.2.
⁹⁰ HRW, p.5.
⁹¹ LFNKR, p.5.
⁹² AI, p.2.
⁹³ JC, para. 8, HRW, p. 2 and LHUK, para. 3, part E, p.7.
⁹⁴ AI, p. 3.
⁹⁵ JS1, para. 7.
⁹⁶ AI, p. 4.
⁹⁷ CSW, para. 34.
⁹⁸ JC, para. 16. See also JC, paras. 15, 18 and 19.
⁹⁹ LFNKR, p.2. See also, LFNKR, recommendations, p.7 and HRW, p.3.
¹⁰⁰ PSCORE, para. 2. See also, HRW, pp.3-4.
¹⁰¹ JS1, para. 11.
¹⁰² HRW, p.4. See also, HRW, recommendations, p.5.
¹⁰³ LFNKR, p.4.
¹⁰⁴ HRW, p.4.
¹⁰⁵ LFNKR, point 5, p.4.
¹⁰⁶ HRW, p.6.
¹⁰⁷ HRW, p.4.
¹⁰⁸ CSW, para. 37.
¹⁰⁹ LFNKR, point 6, p.4.
¹¹⁰ HRW, p.3. See also, LFNKR, p.4.
¹¹¹ HRW, p.3.
¹¹² HRW, p.5.
¹¹³ LFNKR, p.7.
¹¹⁴ AI, p.2.
¹¹⁵ AI, pp.2-3.
¹¹⁶ JC, para. 24 and see also recommendation, para 23.
¹¹⁷ AI, p.3.
¹¹⁸ LFNKR, p.7.
¹¹⁹ AI, p.3.
¹²⁰ AI, pp.3-4.
¹²¹ NKHR, part B, p.3.
¹²² LFNKR, p.7 and AI, p.4.
¹²³ NKHR, part B, p.3.
¹²⁴ NKHR, p.3.
¹²⁵ LFNKR, point 7, p.4.
¹²⁶ LFNKR, p.7.
¹²⁷ JC, paras 20 and 29.
¹²⁸ HRW, pp. 4-5 and recommendations, p.7.
¹²⁹ NKHR, part B, p.4.
¹³⁰ NKHR, p.5.

- ¹³¹ LFNKR, point 9, p.5. See also LFNKR, p.2.
¹³² PSCORE, para. 12.
¹³³ JS1, para. 26.
¹³⁴ HRW, p.2. See also, JC, paras. 9-12.
¹³⁵ LFNKR, p.6. See also, executive summary.
¹³⁶ LFNKR, p.7.
-